

373-18

TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR: San Salvador, a las quince horas con cuatro minutos del día catorce de febrero de dos mil veinte.

I. El presente procedimiento administrativo sancionador se tramita contra la proveedora _____, propietaria del establecimiento denominado “ _____”, ubicado en _____

_____ municipio de Tejutla, departamento de Chalatenango, en el que se llevó a cabo inspección en fecha 16/03/2017, que se documentó en acta de inspección con número 490 (fs.3) por el supuesto incumplimiento del artículo 7 inciso primero, 14 y 27 d) de la Ley de Protección al Consumidor –en adelante LPC- que da lugar a la supuesta infracción grave establecida en el artículo 43 letra f) de la LPC que literalmente establece: “Ofrecer bienes en los que no se cumplan las normas técnicas vigentes” y la supuesta infracción muy grave establecida en el artículo 44 letra a) de la LPC que literalmente establece: “Ofrecer al consumidor bienes o productos vencidos (...)”.

1. En tal sentido, por resolución de fecha 03/07/2018, este Tribunal dio por iniciado el procedimiento sancionatorio simplificado, en contra de la proveedora _____ por las supuestas infracciones de los artículos 43 letra f) y 44 letra a) de la LPC, el cual fue notificado a la denunciada en fecha 22/01/2019.

Así mismo, el día 25/01/2019 se recibió escrito y documentación anexa, presentado por la proveedora (fs. 14-20) en el que expone argumentos de defensa sobre la infracción atribuida, sin que este Tribunal haya resuelto la petición formulada, siendo el último acto procesal realizado, el relacionado auto de inicio notificado.

2. Como es sabido, las “Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de la Administración Pública” –en adelante DTPA-, fueron promulgadas mediante Decreto Legislativo N° 762, publicado en el Diario Oficial N° 209, Tomo 417, de fecha 9/11/2017, y entraron en vigencia el 31/01/2018. Estas conforman un cuerpo legal transitorio adoptado por la Administración Pública hasta el día anterior a la vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), es decir, hasta el 13/02/2019. Las DTPA deberán, por tanto, aplicarse a todos aquellos procedimientos administrativos sancionadores que fueron iniciados (mediante auto de inicio notificado en legal forma) durante su vigencia, es decir, a aquellos que fueron iniciados a partir del 31/01/2018 y, hasta la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), es decir el día 14/02/2019. Lo anterior en atención a los principios de legalidad, irretroactividad y unidad procesal de los procedimientos, los cuales establecen que todo procedimiento administrativo sancionador deberá tramitarse y finalizarse aplicándole la norma procesal que estaba vigente al momento de su inicio.

Una vez determinado el ámbito de aplicación de las DTPA, este Tribunal Sancionador procede a determinar si las mismas se aplican al caso en concreto, el cual, como ya ha sido mencionado, fue

iniciado el día 03/07/2018. Efectivamente, el auto de inicio fue notificado en legal forma el día 22/01/2019 a la proveedora, por lo que el régimen procesal regulado en las DTPA es de aplicación directa al presente procedimiento administrativo sancionador.

II. En este estado del procedimiento este Tribunal emitirá la resolución que conforme a derecho corresponde, de acuerdo al *iter* lógico siguiente: A. Vigencia y aplicación de las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y el Régimen de la Administración Pública, B. Caducidad administrativa a nivel doctrinario y jurisprudencial –Nacional y Española-, y C. Aplicación de la caducidad al presente caso.

A. Este Tribunal Sancionador, procurando que todo procedimiento administrativo se tramite según los plazos previamente establecidos en las DTPA, especialmente en lo referente a la caducidad administrativa, considera que al presente procedimiento sancionador debe aplicarse la obligación establecida en el artículo 5 inciso 2º que establece: “*El procedimiento administrativo deberá concluirse por acto o por resolución final en el plazo máximo de noventa días posteriores a su iniciación (...)*”. De acuerdo con dicha regla, este Tribunal Sancionador es del entendimiento, que existía un máximo de 90 días contados a partir del inicio del procedimiento administrativo sancionador para emitir resolución final. Por otro lado, las mismas DTPA en su artículo 8 establecen que: “*Los plazos que el presente decreto establece en días, se comprenderán solamente días hábiles*”, es decir, el plazo de los 90 días, debía computarse en días hábiles. Una vez concluidos estos 90 días hábiles las DTPA regularon los efectos legales del acaecimiento de la finalización de este plazo, estableciendo en su artículo 7 letra b) que vencido el plazo máximo para dictar resolución expresa en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, *se producirá caducidad*.

B. La caducidad es una figura procesal que regula la terminación anormal o anticipada del procedimiento administrativo, que se refiere a un hecho jurídico-procesal específico: el transcurso de un plazo procesal señalado por ley. Por ejemplo, transcurrido el plazo previsto para el ejercicio de un derecho, o la realización de un trámite, o la interposición de un recurso, la doctrina procesal establece que se entenderá por perdido el derecho, trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse. La caducidad también dará lugar a la terminación de un proceso, extinguiéndolo por el hecho de que no ha habido actividad procesal alguna en el plazo que establece la ley. En otros términos: en virtud del interés general, dentro del ordenamiento jurídico la caducidad se crea para que las acciones y recursos sean ejercidos dentro de un plazo concreto, de manera que los procedimientos no queden estancados indefinidamente, y que los derechos o potestades otorgados en términos favorables sean realmente aprovechados por sus titulares.

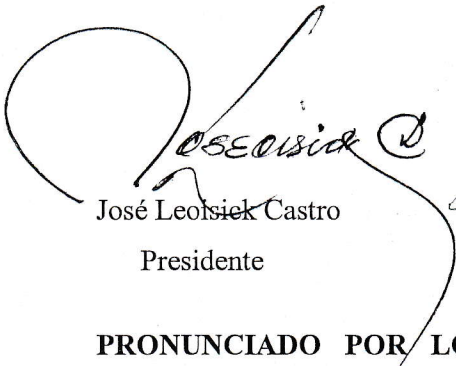
En el ámbito del derecho público administrativo la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ha emitido sentencia mediante la cual define la caducidad administrativa como: “*(...) un modo anormal de finalizar un proceso administrativo que ha sido paralizado*”

III. En virtud de lo anterior y con base a los artículos 5 inciso 2° y 7 literal b) de las DPTA, este Tribunal RESUELVE:

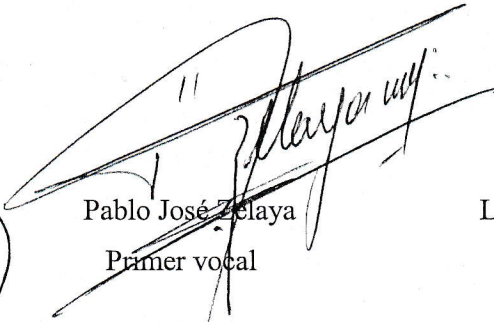
a) *Declárase la finalización y extinción* del presente procedimiento administrativo sancionador por haber acaecido la caducidad administrativa, el cual fue promovido por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor en contra de la proveedora, quedando abierta la posibilidad de que el denunciante pueda ejercer de nuevo su derecho de denuncia, si aún no han concurrido los efectos de prescripción aplicables.

b) *Archívese* las actuaciones del presente procedimiento sancionador.

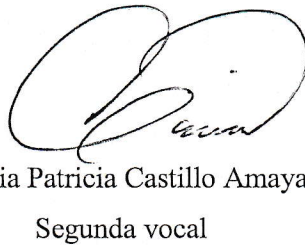
c) *Notifíquese* a las partes.



José Leotsiek Castro
Presidente



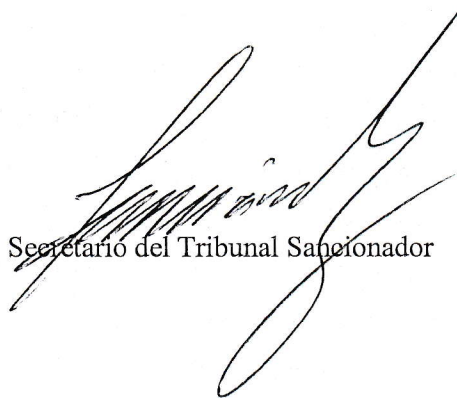
Pablo José Zelaya
Primer vocal



Lidia Patricia Castillo Amaya
Segunda vocal

PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR QUE LO SUSCRIBEN.

BM



Secretario del Tribunal Sancionador